



Consejo de
Transparencia y
Buen Gobierno

PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN

N/REF: RT 0081/2017

FECHA: 08 de junio de 2017

ASUNTO: Resolución de Reclamación presentada al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno

En respuesta a la Reclamación número RT/0081/2017, presentada por [REDACTED], el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, considerando los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos que se especifican a continuación, adopta la siguiente **RESOLUCIÓN**:

I. ANTECEDENTES

1. Por escrito registrado en el Ayuntamiento de Rionansa -Cantabria- el 12 de enero de 2017, el ahora reclamante plantea, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno -desde ahora, LTAIBG- la siguiente solicitud de acceso a la información

Que se me remita a través de correo postal la copia del nombramiento de secretario accidental [de la indicada Corporación local] por el Director General de Administración Local de la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria

Transcurrido el plazo previsto en el artículo 24.2 de la LTAIBG sin haber recibido contestación alguna a su previa solicitud de acceso a la información, el ahora reclamante la entiende desestimada por silencio administrativo y, en consecuencia, por escrito registrado en esta Institución el 8 de marzo de 2017 interpone una reclamación al amparo de lo previsto en el artículo 24 de la LTAIBG.

ctbg@consejodetransparencia.es



2. Mediante escritos del mismo 8 de marzo de 2017 por la Oficina de Reclamaciones de las Administraciones Territoriales de este Consejo se dio traslado del expediente, por una parte, a la Dirección General de Servicios y Atención a la Ciudadanía de la Consejería de Presidencia y Justicia de la Comunidad Autónoma de Cantabria para conocimiento, y, por otra parte, a la indicada Corporación municipal a fin de que, en el plazo de quince días hábiles, se formularan las alegaciones que se estimasen convenientes, aportando, asimismo, toda la documentación en la que fundamentar las alegaciones que pudieran realizarse.

Por escrito del Alcalde de Rionansa registrado en esta Institución el 30 de marzo de 2017 se pone de manifiesto lo siguiente:

- El secretario con carácter accidental fue nombrado por la Dirección General de Administración Local con el objetivo de que el Ayuntamiento no quede paralizado durante ese periodo de tiempo.
- El secretario accidental nombrado fue un funcionario que ocupa el cargo de Auxiliar Administrativo para realizar las tareas básicas como firma de certificados de empadronamiento y tareas de naturaleza similar.
- El auxiliar administrativo fue asesorado por el sindicato de trabajadores al que pertenece en el sentido de que se limitase a las tareas básicas y elementales y no asumiese competencias impropias que pudieran acarrearle una responsabilidad futura.

Como documentación complementaria, el escrito de alegaciones se acompaña de copia de Informe del Presidente de COSITAL de Cantabria en el que se indica que tras la publicación en la página web del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de Cantabria sobre la vacante existente en el ayuntamiento de referencia, *"NO consta a este Colegio la existencia de funcionarios con habilitación de carácter estatal interesados en la cobertura con carácter provisional del puesto de Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Rionansa"*.

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con su artículo 38.2.c) y el artículo 8.2.d) del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la Presidenta de este organismo es competente para resolver, con carácter potestativo y previo a un eventual recurso contencioso-administrativo, las reclamaciones que se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información.
2. A tenor del artículo 24.6 de la LTAIBG, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene competencia para conocer de las reclamaciones que regula dicho



precepto “salvo en aquellos supuestos en que las Comunidades Autónomas atribuyan dicha competencia a un órgano específico, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional cuarta de esta Ley”. Tal disposición prevé en sus apartados 1 y 2 lo siguiente:

“1. La resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas. (...).

2. Las Comunidades Autónomas podrán atribuir la competencia para la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. A tal efecto, deberán celebrar el correspondiente convenio con la Administración General del Estado, en el que se estipulen las condiciones en que la Comunidad sufragará los gastos derivados de esta asunción de competencias”.

En desarrollo de las anteriores previsiones normativas el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Comunidad Autónoma de Cantabria (Consejería de Presidencia y Justicia) han suscrito un Convenio para el traslado a este Consejo del ejercicio de la competencia para la resolución de las reclamaciones previstas en el citado artículo 24 LTAIBG en los supuestos de resoluciones dictadas por aquella Administración Autonómica y por las Entidades Locales incluidas en su ámbito territorial, así como por los entes, organismos y entidades integrados en el sector público autonómico o local.

3. Precisadas en los anteriores Fundamentos Jurídicos las reglas relativas a la competencia orgánica para dictar esta Resolución, por lo que respecta al objeto de la pretensión que la motiva cabe señalar que se trata de la obtención de copia del acuerdo de nombramiento de un funcionario de la Corporación local de referencia como secretario-interventor accidental de la misma.

Con carácter preliminar a conocer sobre el fondo del asunto resulta necesario, en consecuencia, partir del análisis del marco normativo de los procesos de cobertura de los puestos reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. En este sentido, cabe recordar que el artículo 92 *bis* de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local determina en su apartado 1 que “son funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones locales, cuya responsabilidad administrativa está reservada a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional: a) La de Secretaría, comprensiva de la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo. b) El control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación.”



De acuerdo con esta premisa, en todas las Corporaciones locales existen puestos de trabajo reservados a esta clase concreta de funcionarios que desempeñaran las funciones a ellos reservados. En atención a ello, es en el Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional la norma en la que se concretan las especialidades sobre las formas de provisión de puestos de trabajo a ellos reservados. En concreto, su artículo 33 aborda la regulación de los nombramientos accidentales como forma de provisión de puestos de trabajo. En dicho precepto se establece que, cuando no fuese posible la provisión del puesto por los procedimientos previstos en los artículos anteriores del Real Decreto de referencia -concurso, libre designación, nombramientos provisionales, acumulaciones, comisiones de servicios-, *“las Corporaciones locales podrán nombrar con carácter accidental a uno de sus funcionarios suficientemente capacitado. En los casos de vacante del puesto, comisión de servicios o servicios especiales del titular, con carácter previo a dicho nombramiento, deberán solicitar preceptivamente informe al órgano competente de la comunidad autónoma sobre la existencia de algún funcionario con habilitación de carácter nacional interesado en la provisión del puesto de trabajo por los procedimientos previstos en los artículos 30, 31 y 32.”*

4. Señalado lo anterior, por lo que respecta al fondo del asunto planteado cabe recordar que la LTAIBG tiene por objeto *“ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento”*. De acuerdo con ello, la LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a *“acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española, desarrollados por esta Ley”*, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como *“los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”*.

De acuerdo con lo expuesto, no cabe duda alguna que la materia sobre la que se solicita el acceso a la información se trata de “información pública” a los efectos de la LTAIBG dado que en ella se cumplen los dos requisitos requeridos por el artículo 13 de dicha Ley. En primer lugar, se trata de información elaborada en el ejercicio de las competencias de empleo público atribuidas a la Corporación municipal por la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. Y, en segundo lugar, se trata de información elaborada por una Corporación municipal, sujeto incluido en el ámbito de aplicación de la LTAIBG a tenor de lo dispuesto en su artículo 2.1.a).

En el presente caso, no consta que el Ayuntamiento haya trasladado al solicitante de acceso a la información copia del acuerdo del órgano municipal competente para nombrar a un funcionario de la propia Corporación para ejercer las funciones de secretario accidental en la misma, de modo que, atendiendo a lo expuesto en



los anteriores Fundamentos Jurídicos, procede estimar la Reclamación planteada al versar sobre información pública que obra en poder de un sujeto vinculado a la LTAIBG.

III. RESOLUCIÓN

En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede

PRIMERO: ESTIMAR la reclamación presentada por versar sobre información pública en poder de un sujeto obligado por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

SEGUNDO: INSTAR al Ayuntamiento de Rionansa a facilitar copia de la información solicitada por el reclamante en el plazo de un mes, así como remitir en igual plazo a este Consejo copia del cumplimiento de esta Resolución.

De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

LA PRESIDENTA DEL
CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

PA.
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

Fdo: Javier Amorós Dorada

